



TJA

UNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS

308

TJA/5ªSERA/007/2025-PRA-FG

**PROCEDIMIENTO:**

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  
POR FALTA GRAVE.

**EXPEDIENTE:** TJA/5ªSERA/007/2025-  
PRA/FG

**PRESUNTO RESPONSABLE:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**AUTORIDAD INVESTIGADORA:**  
TITULAR DE LA JEFATURA DE  
INVESTIGACIÓN DE LA ENTIDAD  
SUPERIOR DE AUDITORÍA Y  
FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL  
ESTADO DE MORELOS (ESAF).

**AUTORIDAD SUBSTANCIADORA:**  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE  
SUBSTANCIACIÓN DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL JURÍDICA DE LA ENTIDAD  
SUPERIOR DE AUDITORÍA Y  
FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL  
ESTADO DE MORELOS

**MAGISTRADO:** JOAQUÍN ROQUE  
GONZÁLEZ CEREZO.

**SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:**  
VICENTE RAÚL PARRA CASTILLO.

"2026, Año de Mariquita Nica Parada"  
TJA  
UNAL ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS  
A ESPECIALIZADA  
ADMINISTRATIVA

Cuernavaca, Morelos, a doce de mayo de dos mil veintiséis.

## 1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

**Sentencia definitiva** que emite la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con motivo del **procedimiento de responsabilidad administrativa por falta grave** instaurado en contra del ciudadano [REDACTED] [REDACTED] en su calidad de ex titular del Órgano Interno de Control (Contralor Municipal) de Yecapixtla, Morelos, en la administración 2022-2024, a quien se le imputó la comisión de **falta grave** durante su desempeño en el servicio público. Así, se determina que no se acreditó la responsabilidad administrativa de [REDACTED], en la comisión de la falta grave de desacato; lo que se resuelve en este acto al tenor siguiente:

## 2. GLOSARIO

**Autoridad  
investigadora:**

Titular de la Jefatura de Investigación de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos (ESAF).

**Autoridad  
substanciadora:**

Jefa de Departamento de Substanciación de la Dirección General Jurídica de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.



TJA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS

TJA/5ªSERA/007/2025-PRA-FG

309

**LJUSTICIAADMVAEM**

*Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos<sup>1</sup>.*

**LORGTJAEMO**

*Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos<sup>2</sup>.*

**LGRA**

*Ley General de Responsabilidades Administrativas.*

**LRESADMVASEMO**

*Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos.<sup>3</sup>*

**CPROCIVILEM**

*Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos.*

**IPRA**

*Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.*

**Presunto responsable:**

[REDACTED]

<sup>1</sup> Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5514.

<sup>2</sup> Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5514.

<sup>3</sup> Idem.

"2026, Año de Margarita Maaza Payada"  
TJA  
ADMINISTRATIVA  
MORELOS  
REALIZADA  
ADMINISTRATIVA

Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Morelos.

**Tribunal:**

### **3. ANTECEDENTES DEL CASO**

#### **3.1 Actuaciones realizadas ante la Autoridad Investigadora.**

##### **3.1.1 Denuncia.**

Mediante oficio [REDACTED] de fecha veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, la [REDACTED] [REDACTED] Directora General Jurídica de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, remitió al Lic. [REDACTED] en su carácter de Jefe de Departamento de Investigación de la propia entidad fiscalizadora, los oficios [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] girados por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, solicitando al Jefe de Departamento de Investigación, inicie los procedimientos de investigación correspondientes, toda vez que se pudiera estar en presencia de una posible falta administrativa.

Por lo anterior, con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, el Lic. [REDACTED] Jefe de Departamento de Investigación de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, acordó el inicio de la investigación, registrándose para el efecto el expediente [REDACTED]



### 3.1.2 Investigación

a).- A efecto de contar con los elementos necesarios para resolver el planteamiento de la denuncia, la **autoridad investigadora** ordenó girar oficio<sup>4</sup> al Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos, a efecto de que remitiera:

El nombre completo de la persona que ocupó el cargo de Contralor Municipal, a partir del veintiséis de enero de dos mil veinticuatro a la fecha;

Remita el o los expedientes laborales de las personas que han ocupado el cargo de Contralor Municipal en el periodo antes mencionado; y

Remita copias certificadas del nombramiento oficial de la persona que ha ocupado el cargo de Contralor Municipal a partir del veintiséis de enero de dos mil veinticuatro a la fecha.

b).- Y de igual manera, ordenó girar oficio<sup>5</sup> al Contralor Municipal de Yecapixtla, Morelos, para que remitiera:

Copias certificadas del oficio [REDACTED] de fecha veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, dirigido al C.P. [REDACTED] en su carácter de Contralor Municipal de Yecapixtla, Morelos y suscrito por [REDACTED], en su carácter de Secretario Técnico de la

<sup>4</sup> Foja 60 del expediente que se resuelve.

<sup>5</sup> Visible a foja 38.

"2026, Año de Margarita Maza Parada"  
TJA  
ADMINISTRATIVA  
MORELOS  
REALIZADA  
MINISTERIO

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos; y adjuntar la respuesta que se la haya dado a dicho oficio.

### 3.1.3 Calificación de faltas administrativas e Informe de Presunta Responsabilidad.

Mediante resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veinticinco<sup>6</sup>, la **autoridad investigadora** emitió el **ACUERDO DE CALIFICACIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA**, del cual se desprende que determinó la presunta existencia de la **falta administrativa grave de DESACATO**, atribuida al C. [REDACTED]

[REDACTED], en su carácter de ex Contralor Municipal del Yecapixtla, Morelos, administración [REDACTED] (del [REDACTED])

Consecuentemente, con fecha diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, se emitió el **INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**<sup>7</sup>, respecto del expediente de investigación número [REDACTED] en el que se imputa al C. [REDACTED], la falta administrativa tipificada como **DESACATO**, contemplada en el artículo 63 de la **LGRA**.

### 3.2. Procedimiento en sede administrativa.

El **IPRA** fue recibido por la **autoridad sustanciadora**, en términos del acuerdo de fecha once de marzo de dos mil veinticinco<sup>8</sup>, instruyendo emplazar al **presunto responsable** a

<sup>6</sup> Fojas 100 a 106 del expediente que se resuelve.

<sup>7</sup> Fojas 107 a 118 del expediente que se resuelve.

<sup>8</sup> Fojas 120 a 124 del expediente que se resuelve.



efecto de que comparezca a la audiencia inicial planteada para las doce horas del dos de abril de dos mil veinticinco, fecha en que tuvo verificativo.

Consecuentemente, la **autoridad substanciadora** mediante oficio [REDACTED] recibido en este **Tribunal** con fecha ocho de abril de dos mil veinticinco, y con base en lo dispuesto por el artículo 209, fracción I, de la **LGRA**, remitió el expediente original [REDACTED], a efecto de que se resuelva lo correspondiente por cuanto a la presunta responsabilidad que se le atribuye al C. [REDACTED] en virtud de que la falta que se le imputa ha sido considerada como grave (desacato).

### 3.3 Procedimiento en sede jurisdiccional.

Mediante acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil veinticinco, se tuvo por presentada a la autoridad substanciadora Jefa de Departamento de Substanciación de la Dirección General Jurídica de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos (previa subsanación que le fue requerida), determinándose la admisión del procedimiento administrativo en mención, habiéndose radicado la misma ante ésta Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos con el número de expediente [REDACTED] ordenándose hacer saber la llegada de los autos a las partes involucradas.

#### 3.3.1 Admisión y desahogo de Pruebas.

Con fecha once de septiembre de dos mil veinticinco<sup>9</sup>, a las once horas, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 209, fracciones II, último párrafo, III y IV de la **LGRA**, teniendo que previamente se proveyó sobre las pruebas que fueron ofrecidas por las partes<sup>10</sup>, concretamente por la **autoridad investigadora**, así como las determinadas por esta Sala para mejor proveer, siendo las siguientes:

**En lo que respecta al presunto responsable:**

Por cuanto a las pruebas del **presunto responsable**, se toma en consideración que en la audiencia inicial, de fecha dos de abril de dos mil veinticinco, se llevó a cabo la certificación de su incomparecencia, así como el que tampoco obró escrito alguno mediante el cual diera contestación a la falta administrativa que se le imputa, sin ofrecer pruebas correspondientes a su parte, **teniéndole por precluido su derecho para ofrecer pruebas.**

Por cuanto a las pruebas que fueron ofertadas por la **autoridad investigadora (Jefe de Departamento de Investigación de la Dirección General Jurídica de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos)**, se tuvieron por admitidas las siguientes admitidas (mismas que se transcriben ácorde a su redacción de origen):

<sup>9</sup> Fojas 298 a 306 del expediente que se resuelve.

<sup>10</sup> Acuerdo de fecha primero de julio de dos mil veinticinco, fojas 260 a 268 del expediente que se resuelve.



a) [REDACTED], de fecha dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, suscrito por el [REDACTED] Director del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, mediante el cual informó y remitió lo siguiente:

a.1. Copia certificada del nombramiento oficial y expediente laboral del servidor público, [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control (Contralor Municipal) de Yecapixtla Morelos.

a.2. Copia certificada de CURP, INE, así como diecinueve oficios diversos del [REDACTED]

b) Oficio número [REDACTED] de fecha trece de agosto de dos mil veinticuatro, recibido con fecha quince de agosto del año dos mil veinticuatro, signado por el C. [REDACTED] Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Morelos, mediante el cual dio a conocer a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, los hechos denunciados, a efecto de realizar una investigación y substanciación en contra del [REDACTED] Titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos.

c) Oficio número [REDACTED] de fecha veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, firmado por el C. [REDACTED] Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos,

por el que requiere informe de autoridad al [REDACTED]  
[REDACTED] su carácter de Contralor Municipal del  
municipio de Yecapixtla, Morelos.

d) Oficio número [REDACTED], de fecha dieciocho  
de octubre del año dos mil veinticuatro, suscrito por [REDACTED].  
[REDACTED], Contralor Municipal de  
Yecapixtla, Morelos, por el que remitió al área investigadora,  
copias certificadas del oficio [REDACTED], de fecha  
veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro y recibido por  
correo certificado con fecha veintiséis de febrero del año dos  
mil veinticuatro, así como de la contestación presentada a la  
Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de  
Morelos con numero de oficio [REDACTED] de fecha  
doce de septiembre de dos mil veinticuatro y entregado con  
fecha veintiséis de septiembre del año dos mil veinticuatro.

e) Oficio número [REDACTED], de fecha dieciocho  
de octubre del año dos mil veinticuatro, suscrito por [REDACTED].  
[REDACTED] Contralor Municipal de  
Yecapixtla, Morelos, por el que remitió al área investigadora,  
copias certificadas del oficio [REDACTED], de fecha  
veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, así como de la  
contestación presentada a la Secretaria Ejecutiva del Sistema  
Anticorrupción del Estado de Morelos con numero de oficio  
[REDACTED] de fecha doce de septiembre de dos mil  
veinticuatro y entregado con fecha veintiséis de septiembre del  
año dos mil veinticuatro.

**Esta última prueba no fue admitida, por ser la misma que  
había sido ya admitida en el inciso d).**



Por otra parte, en vía de pruebas requeridas para mejor proveer, se determinaron las siguientes:

1. **Informe de autoridad:** Mismo que deberá rendir el **SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MORELOS**, a efecto de que informe si en los archivos de esa unidad administrativa cuenta con el expediente personal, incluyendo sus nóminas de [REDACTED] [REDACTED] quien fungía como **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (CONTRALOR MUNICIPAL) DE YECAPIXTLA, MORELOS** [REDACTED] y de ser así exhiba en un **PLAZO DE TRES DÍAS** a esta Sala, copia debidamente certificada.

**Pruebas, todas, que serán valoradas más adelante en la presente resolución.**

### 3.3.2 Alegatos

De tal manera, al haberse tenido por desahogadas las pruebas, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se declaró abierto el periodo de alegatos por el término común para las partes de cinco días hábiles.

Conforme a dicho plazo, mediante acuerdo de fecha tres de octubre de dos mil veinticinco<sup>11</sup>, se declaró precluido el plazo concedido a las partes, toda vez que no formularon sus

<sup>11</sup> Fojas 304 306.



alegatos correspondientes. Consecuentemente al no encontrarse pendiente ninguna etapa o diligencia por desahogar en el presente procedimiento, se declaró cerrado el periodo de alegatos y se citó a las partes para oír la resolución correspondiente.

#### **4. COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL**

La Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, tiene competencia para conocer y resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, de conformidad con los artículos *109-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; 1, 30, inciso A), fracciones I y II de la *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*; 8, fracción VII, y 11, de la *Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos*; 3, fracción XXVII, 9, fracción IV, 12, 13 y 209 de la **LGRA**.

Lo anterior, toda vez que los preceptos en mención estipulan que el **Tribunal**, está dotado de plena jurisdicción en la Entidad, atribuyéndose específicamente al suscrito Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas, la facultad de conocer y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por falta grave, como acontece en el caso que se imputa al ex servidor público [REDACTED], la denominada DESACATO, prevista en el artículo 63, de la **LGRA**.

#### **5. DEBIDO PROCESO Y FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO.**



De conformidad con lo establecido en el artículo 1 segundo párrafo de la **LORGTJAEMO** y artículo 111 de la **LGRA**, en los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos; por lo que, antes de entrar al análisis de fondo, debe verificarse que la investigación y substanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas, se hayan llevado a cabo conforme a las reglas establecidas en la citada ley general.

Para estar en aptitud de elaborar una revisión respecto de cada uno de los derechos que protegen al **presunto responsable** involucrado, es necesario desarrollar el derecho a la tutela judicial efectiva, las etapas que lo integran, así como analizar cada una de las garantías mínimas que deben respetarse.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el acceso a una tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Como se desprende de la tesis de jurisprudencia bajo el rubro:



## GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.<sup>12</sup>

La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.

Las garantías del debido proceso que resultan aplicables a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, son las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como las **formalidades esenciales del procedimiento**, las cuales permiten que cualquier persona involucrada en un litigio o controversia esté en aptitud de desplegar sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica.

<sup>12</sup> Registro digital: 172759; Instancia: Primera Sala; Novena Época; Materias(s): Constitucional; Tesis: 1a./J. 42/2007; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 124; Tipo: Jurisprudencia.



Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el contenido esencial de esas formalidades, tal y como se establece en la tesis jurisprudencia cuyo rubro y texto son:

**“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”<sup>13</sup>**

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Según dicha jurisprudencia, las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo cumplimiento permite concluir que se ha respetado la garantía de audiencia, son: 1. La notificación del inicio del procedimiento; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar, y 4. La emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Por lo qué, esta autoridad considera, que conforme a las constancias que obran en autos, se advierte que en el caso

<sup>13</sup> Registro digital: 200234; Instancia: Pleno; Novena Época; Materias(s): Constitucional, Común; Tesis: P./J. 47/95; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 133; Tipo: Jurisprudencia.



que nos ocupa, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que se respetó su derecho fundamental de audiencia, porque al **presunto responsable** se le notificó el inicio del procedimiento, fue emplazado por cédula de notificación que se encuentra visible a foja 127 del presente expediente; le fue informado lo respectivo a la acusación que pesaba en su contra en términos del **IPRA**, se le indicaron los hechos que se le imputaron; sin que acudiera a controvertir los hechos que se le atribuyeron.

De igual forma, el **presunto responsable** tuvo la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en su defensa, así como de alegar, sin que en su momento procesal hubiera ejercido tal derecho, teniéndose por precluido.

### 5.1 Contexto normativo.

Es de señalarse que gramaticalmente, el término **corrupción** se refiere a un fenómeno de desnaturalización o desviación de ciertos parámetros de comportamiento. En este sentido, la corrupción pública, implica una degradación de lo público en lo privado<sup>14</sup>, relacionado con lo anterior, tenemos que la **corrupción pública** desvía el interés general hacia intereses privados, desconociendo normas jurídicas o éticas.

Así, la **corrupción** es uno de los fenómenos más graves que afecta el estado de derecho en la actualidad, pues supone el quebrantamiento de los principios esenciales sobre los que se asienta todo régimen democrático, multiplicando la desigualdad, la arbitrariedad y la injusticia, minando así la

<sup>14</sup> CORTINA, en: LAPORTA SAN MIGUEL/ ÁLVAREZ, La Corrupción política, 1997, 266.



confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Esto se expone para contextualizar el actual marco jurídico de combate a la corrupción, el cual emergió el veinticuatro de julio de dos mil quince, con la suscripción por parte de nuestro país, conjuntamente con ciento setenta y seis Estados, de la **Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción**, instrumento internacional de carácter amplio destinado a combatir el flagelo de la corrupción en todo el mundo, que no solo pone en peligro la estabilidad y seguridad de las sociedades, las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, el desarrollo sostenible y el estado de derecho, sino que constituye también un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hizo esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella.

En este instrumento internacional, los Estados parte se obligaron a adoptar medidas eficaces para prevenir la **corrupción**, tipificar como delito los actos de corrupción y asegurar el cumplimiento efectivo de la ley, cooperar con otros Estados parte en la aplicación de leyes de lucha contra la corrupción y prestarse asistencia mutua en la restitución de los activos obtenidos mediante la corrupción.

Por otra parte, además de disponer que se adopten medidas eficaces en cada una de esas esferas concretas, el artículo 5 de dicha **Convención**, ha establecido las

obligaciones más generales que debe cumplir cada Estado parte:

- a) Formular y aplicar o mantener en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción;
- b) Establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción; y
- c) Procurar evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.

Además, por virtud del artículo 6 del mismo instrumento normativo, cada Estado está obligado a garantizar la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción mediante la aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5, y cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas.

Ante este deber asumido por el Estado Mexicano en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, se reformaron disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, siendo que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el **veintisiete de mayo de dos mil quince**, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como **la institución** adecuada y efectiva encargada de establecer las bases generales para la



emisión de políticas públicas integrales y directrices básicas en el combate a la corrupción, difusión de la cultura de integridad en el servicio público, transparencia en la rendición de cuentas, fiscalización y control de los recursos públicos, así como de fomentar la participación ciudadana, como condición indispensable en su funcionamiento.

Dentro del nuevo marco constitucional de responsabilidades, dicho sistema nacional se instituye como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, fiscalización, vigilancia, control y rendición de las cuentas públicas, bajo los principios fundamentales de transparencia, imparcialidad, equidad, integridad, legalidad, honradez, lealtad, eficiencia, eficacia y economía; mecanismos en los que la sociedad está interesada en su estricta observancia y cumplimiento.

En cumplimiento a lo anterior, el Congreso de la Unión expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación del dieciocho de julio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

En el artículo transitorio segundo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se estipuló que dentro del año siguiente, las Legislaturas de las entidades federativas, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

En este contexto se expidió la **LGRA**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el **dieciocho de julio de dos mil dieciséis**; la **LRESADMVASEMO**, **LORGTJAEMO**, y, **LJUSTICIAADMVAEM**, publicadas el **diecinueve de julio de dos mil diecisiete**, en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5514.

Así, para el cumplimiento del fin principal que es el combate a la corrupción, se establecieron las conductas de servidores públicos y particulares que se consideran "de corrupción", ergo, se tipifican como faltas administrativas.

El sistema de **responsabilidades administrativas** encuentra su base en el artículo 109 fracciones III y IV, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, al señalar que los **servidores públicos y particulares** que incurran en responsabilidad frente al Estado y serán sancionados conforme a lo siguiente:

"...III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y

310



TJA

JUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
DEL ESTADO DE MORELOS

TJA/5ªSERA/007/2025-PRA-FG

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones..."

"IV. Los **tribunales de justicia administrativa** impondrán a los **particulares** que intervengan en actos vinculados con **faltas administrativas graves**, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones..."

Del dispositivo se obtiene que en general, la **responsabilidad administrativa se define como aquella en la que incurre un servidor público por realizar actos u omisiones que afecten la honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.**

Los **principios** señalados a su vez se entienden



definidos de la siguiente manera:

De **legalidad**, que implica que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado conforme al derecho vigente. En otros términos: todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal en sentido material, la que, a su vez, debe ser acorde a las disposiciones de fondo y forma consignadas en nuestra constitución. En este sentido, el principio de legalidad constituye la primordial exigencia de todo Estado de Derecho.

De **honradez**. Es un principio de moral, llevado al orden jurídico, para establecer que los servidores públicos no deben confundir ni contraponer la finalidad de la función pública con los intereses particulares, ni obtener beneficios económicos adicionales a las contraprestaciones que el estado le otorgue, a cambio de la realización de actos de autoridad o de gobierno a favor de los gobernados.

De **lealtad**. Es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y del honor. Cabe señalar que específicamente la lealtad de los servidores públicos debe ser para con nuestro país, con la ciudadanía, con la misión y visión de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad, en la que desempeñen su empleo, cargo o comisión.

De **imparcialidad**. Este principio se encuentra contenido en el artículo 17 constitucional, cuya parte relativa indica:

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para



impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..."

Trasladado ese principio a la actuación de los servidores públicos, implica que no puedan hacer excepción de personas en la tramitación de algún acto administrativo, ni tampoco discriminar a los particulares en razón de sexo, raza, religión, entre otros; en este caso, el servidor público debe carecer de motivación personal alguna en todo acto administrativo que realice en ejercicio de sus funciones públicas, ya que de existir algún conflicto de interés éste se deberá excusar para conocer del mismo.

De **eficiencia**. Este principio significa que un servidor público debe tener la voluntad y disposición para prestar el servicio público con el afán de producir el máximo de resultados en beneficio al bien común, con el mínimo de recursos y en un tiempo óptimo.

Ahora bien, no debe pasar inadvertido el hecho de que en todo momento deberá enfocarse el actuar de los servidores públicos en estricto apego y respeto a los derechos humanos, gestión que, conforme al ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizarán, promoverán y protegerán conforme a los principios aplicables a dichas prerrogativas, como lo son:

a) **Universalidad**, según el cual los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo;



b) **Interdependencia** que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí;

c) **Indivisibilidad** que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y

d) **Progresividad** que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección.

Finalmente, relativo a reglas de integridad, se estiman los siguientes parámetros:

**Actuación pública.** El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público;

**Información pública.** El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad;

**Trámites y servicios.** El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función participa en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atiende a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial;



**Cooperación.** El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, coopera con la dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad.

**Desempeño permanente con integridad.** El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad; y,

**Comportamiento digno.** El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública.

Así, la naturaleza de la responsabilidad administrativa tiene como objetivo proteger el cumplimiento de los deberes públicos por los servidores citados hacia la administración, al respecto sustenta el siguiente criterio establecido por el Poder Judicial de la Federación:

**"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS  
SERVIDORES PÚBLICOS. SU NATURALEZA"<sup>15</sup>.**

<sup>15</sup> Registro digital: 2016267. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época.



En el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé un régimen de responsabilidad pública, en el cual se reconoce que los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, civil, penal y administrativa. Esta última, también denominada disciplinaria, tiene como objetivo proteger el cumplimiento de los deberes públicos por los servidores citados hacia la administración; de ahí que su inobservancia con motivo de una conducta ilegal, relacionada con la actividad como función, generará la posibilidad de que la propia administración les imponga la sanción correspondiente. Por tanto, dicha potestad sancionadora puede entenderse como un derecho penal (sancionador) administrativo, dado que, al igual que ocurre con la responsabilidad penal, la de carácter administrativo busca apreciar que el resultado reprochable no sea ajeno al servidor público, sino que debe estar necesariamente ligado al que debió prever y cometió, por lo cual, debe responder por él, como derivación de su propia conducta.”

Sin embargo, de acuerdo con el precepto supremo en comento, no solo los **servidores públicos** son sujetos de responsabilidad administrativa, sino también los **particulares** que intervengan en actos vinculados con el servicio público, que se consideran como faltas administrativas de naturaleza grave.

En tal sentido, el artículo 108 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* define como servidor público a toda aquella persona que desempeña un empleo cargo o comisión de cualquier naturaleza para el Estado:

“Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título **se reputarán como servidores públicos** a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, **a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza** en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta



Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones...”

Por tanto, por exclusión, se consideran particulares el resto de las personas que no se encuentren en la hipótesis del precepto constitucional.

En este contexto, para la resolución de las faltas administrativas de naturaleza grave, en los artículos 9, fracción IV, 12 y 14, de la **LGRA**; 8, fracción VII, 11 y 13, de la **LRESADMVASEMO**, se atribuye competencia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

En el Título Tercero, Capítulo II, de la **LGRA**, se establecieron las conductas de los **servidores públicos** que son catalogadas como faltas administrativas graves, y que en lo específico se señala la relativa a la imputación que se hace al presunto responsable (artículo 63, desacato):

| FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE   | DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 63 LGRA<br>Desacato | Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. |

5.2 Causas de improcedencia.



"2026, Año de Margarita Maza Parada"

Una vez establecido el contexto jurídico, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido en el artículo 196 de la **LGRA**, se procede a realizar el estudio de las causales de improcedencia.

Las causas de improcedencia establecidas en el precepto, son las siguientes:

I. Cuando la Falta administrativa haya **prescrito**;

II. Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de **competencia** de las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto se deberá hacer del conocimiento a la autoridad que se estime competente;

III. Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto responsable **ya hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria** pronunciada por las autoridades resolutoras del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en ambos casos;

IV. Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, **no se advierta la comisión de Faltas administrativas**, y

V. Cuando se **omita** acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.



En el presente caso del ex servidor público sujeto a procedimiento, al no comparecer a procedimiento, no hizo valer causal de improcedencia alguna

Por otra parte, del estudio oficioso del asunto y de las constancias propiamente, y en relación a las causales de improcedencia, no se aprecia la actualización de la **prescripción** de las facultades sancionatorias de este tribunal, cuenta habida que de conformidad con el artículo 74, de la Ley General, las infracciones consideradas como **faltas graves**, prescriben en siete años, contados a partir de la comisión, o a partir del momento en que hubieren cesado; en consecuencia, si los hechos imputados al **presunto responsable** se verificaron a partir del día veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, fecha del oficio número [REDACTED], mediante el cual, el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, le solicitó proporcionar diversa información, es dable concluir que la prescripción se actualizará, en su caso, hasta el año dos mil treinta y uno.

De igual manera, la **competencia** de las autoridades **investigadora** y **sustanciadora**, se aprecia correcta de conformidad con los artículos 8, fracción III, de la **LRESADMVASEMO**; 76, fracción XXI, 88, fracciones I, X y XXII, y 89 de la *Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos*, y 1, 33, 34 y 41, fracciones I, IV, V y VI del *Reglamento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos*, toda vez que se trata de la

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

probable responsabilidad de un ex Titular del Órgano Interno de Control (Contralor Municipal) del municipio de Yecapixtla, Morelos; en tal sentido, de forma concreta, el artículo 8, fracción III de la **LRESADMVASEMO** establece que la Entidad Superior, será competente para investigar, y substanciar el procedimiento sobre Faltas administrativas graves de los titulares de los órganos constitucionales autónomos; de los servidores públicos titulares y demás adscritos a los **órganos internos de control en los Municipios del Estado de Morelos**, entre otros.

De igual manera, tampoco se aprecia que la falta administrativa que nos ocupa, **ya hubiera sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria.**

En otro tenor, se aprecia que el **IPRA** emitido por la **autoridad investigadora** obra perfectamente bien identificado en el presente sumario, por tanto, no existe improcedencia en ese sentido.

Como consecuencia de lo analizado, no existe impedimento alguno para la prosecución del estudio del presente asunto.

## **6. FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS**

### **6.1 La infracción que se imputa.**

La **autoridad investigadora**, conforme al **IPRA** imputó al C. [REDACTED], ex Titular de la Contraloría Municipal de Yecapixtla, Morelos, lo siguiente:

*“...La falta administrativa se hace consistir en:*



Esta autoridad investigadora considera que la falta administrativa que se le atribuye al [REDACTED] quien ostenta el cargo de Titular del órgano Interno de Control (Contralor Municipal del [REDACTED] del municipio de Yecapixtla, Morelos, es la contemplada en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al NO remitir en vía de Informe lo solicitado por el [REDACTED] Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, mediante oficio [REDACTED] de fecha veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, notificado por correo certificado con fecha veintiséis de febrero del año dos mil veinticuatro, siendo que lo hace hasta el veintiséis de septiembre del año dos mil veinticuatro, es decir siete meses después, lo que evidencia haber retrasado deliberadamente y sin justificación la entrega de la información requerida mediante oficio [REDACTED] aunado a lo anterior la respuesta es emitida por un servidor público distinto, toda vez que el [REDACTED] fue omiso hasta la fecha de la conclusión de su encargo [REDACTED] en entregar la información requerida.

Esta autoridad Investigadora determinó una probable existencia de falta administrativa imputable al [REDACTED] quien ostentaba el cargo de Titular del Órgano Interno de Control (Contralor Municipal del [REDACTED] del municipio de Yecapixtla, Morelos, misma que fue calificada como GRAVE mediante acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil veinticinco, ya que la conducta desplegada por el hoy presunto responsable encuadra en el supuesto previsto en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra se inserta:

Artículo 63 Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de

control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

Ha razón de lo anterior, ha quedado clara y debidamente demostrada la conducta, por lo que esta Autoridad Investigadora determinó la existencia de una probable falta administrativa imputable al [REDACTED] quien ostentaba el cargo de Titular del órgano Interno de Control (Contralor Municipal [REDACTED] del municipio de Yecapixtla, Morelos; dicha conducta encuadra de forma exacta en el supuesto invocado, tipificada como DESACATO, misma que se calificó como una conducta administrativa GRAVE, mediante acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil veinticinco, ya que la conducta desplegada por el hoy presunto responsable encuadra en el supuesto previsto en el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se encuentra clasificada dentro de las faltas administrativas graves cometidas por los Servidores Públicos, en ejercicio de sus funciones...”

Por lo tanto se encuentra demostrada la conducta del [REDACTED], pues, si se toma en cuenta que sus funciones como servidor público adscrito al órgano Interno de Control (Contralor Municipal [REDACTED] del municipio de Yecapixtla, Morelos, era la de dar cumplimiento en el tiempo y forma a lo requerido por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Morelos, y no lo hizo hasta la fecha de conclusión de su encargo, tal como se desprende de las constancias del presente expediente de presunta responsabilidad administrativa, en el que se observa, que en ejercicio de sus atribuciones, retraso deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, ya que NO proporcionó la información al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Morelos, por lo cual, esta autoridad confirma y considera que la hipótesis normativa que se adecua al presunto responsable, es por una falta administrativa grave por Desacato ... (Sic)

De acuerdo a lo señalado, se advierte que la imputación que se le hace al probable responsable, deriva de que, como lo sostiene la **autoridad investigadora**, el **presunto responsable**, quien ostentó el cargo de Titular del órgano Interno de Control (Contralor Municipal del [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED] del municipio de Yecapixtla, Morelos, no remitió en vía de Informe, lo solicitado por el [REDACTED] Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, mediante oficio [REDACTED] de fecha veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro; sino que lo hizo (quien lo sustituyó en el cargo), hasta el veintiséis de septiembre del año dos mil veinticuatro, es decir, siete meses después, lo que evidencia haber retrasado deliberadamente y sin justificación la entrega de la información requerida mediante oficio [REDACTED]

En ese sentido, señala la **autoridad investigadora**, que dicha conducta encuadra de forma exacta en el supuesto invocado, tipificada como desacato, misma que se calificó como una conducta administrativa grave, contemplada en el artículo 63 de la **LGRA**.

## 6.2 Ausencia de declaración del ciudadano [REDACTED]

Como antes se ha referido, de autos se desprende que el **presunto responsable** no compareció al procedimiento de responsabilidad administrativa incoado en su contra, a pesar de haber sido emplazado por medio de cédula de notificación visible a foja 127 del expediente.

### 6.2.1 Planteamiento a dilucidar.



Por lo que el tema a dilucidar es, si como lo determinó la **autoridad investigadora** en el **IPRA**, la conducta atribuida al **presunto responsable**, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 63 de la **LGRA**, al haber realizado **desacato** en razón de que en su carácter de Titular del órgano Interno de Control (Contralor Municipal [REDACTED] del municipio de Yecapixtla, Morelos, no remitió en vía de Informe, lo solicitado por el [REDACTED] Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, mediante oficio [REDACTED], de fecha veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro; sino que se hizo hasta el veintiséis de septiembre del año dos mil veinticuatro, es decir siete meses después, lo que evidencia haber retrasado deliberadamente y sin justificación la entrega de la información requerida.

O si por el contrario, no se han actualizado los elementos previstos para que se pueda tipificar la falta grave de desacato.

### 6.3 Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas.

Es importante señalar, que conforme al texto del artículo 135<sup>16</sup>, de la **LGRA**, que consagra el **principio de presunción de inocencia** de los imputados, corresponde a la **autoridad**

<sup>16</sup> Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan.



**investigadora**, la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de las faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas.

**En este tenor, se reitera que, el presunto responsable no ofreció pruebas de su parte dentro del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.**

**Por cuanto a las pruebas que fueron ofertadas por la autoridad investigadora (Jefe de Departamento de Investigación de la Dirección General Jurídica de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos), se tuvieron por admitidas las siguientes (mismas que se transcriben acorde a su redacción de origen):**

**a)** [REDACTED] de fecha dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, suscrito por el [REDACTED] [REDACTED] Director del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, mediante el cual informó y remitió lo siguiente:

**a.1.** Copia certificada del nombramiento oficial y expediente laboral del servidor público, [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control (Contralor Municipal) de Yecapixtla Morelos.

**a.2.** Copia certificada de CURP, INE, así como diecinueve oficios diversos del [REDACTED]

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

b) Oficio número [REDACTED] de fecha trece de agosto de dos mil veinticuatro, recibido con fecha quince de agosto del año dos mil veinticuatro, signado por el [REDACTED] [REDACTED], Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Morelos, mediante el cual dio a conocer a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, los hechos denunciados, a efecto de realizar una investigación y substanciación en contra del [REDACTED], Titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos.

c) Oficio número [REDACTED] de fecha veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro, firmado por el [REDACTED] [REDACTED], Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, por el que requiere informe de autoridad al [REDACTED] [REDACTED] en su carácter de Contralor Municipal del municipio de Yecapixtla, Morelos.

d) Oficio número [REDACTED] de fecha dieciocho de octubre del año dos mil veinticuatro, suscrito por [REDACTED] [REDACTED], Contralor Municipal de Yecapixtla, Morelos, por el que remitió al área investigadora, copias certificadas del oficio [REDACTED], de fecha veintiséis de enero del año dos mil veinticuatro y recibido por correo certificado con fecha veintiséis de febrero del año dos mil veinticuatro, así como de la contestación presentada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos con numero de oficio [REDACTED] de fecha doce de septiembre de dos mil veinticuatro y entregado con fecha veintiséis de septiembre del año dos mil veinticuatro.



Documentales que obran en el presente expediente, y que se valoran en términos de los artículos 436<sup>17</sup> y 490<sup>18</sup> del **CPROCIVILEM** de aplicación supletoria a la **LJUSTICIAADVMAEMO**, y 133 de la **LGRA** y que serán tomadas en consideración en el apartado siguiente de la presente resolución.

Por otra parte, en vía de pruebas requeridas para mejor proveer, se determinó la siguiente:

1. **Informe de autoridad:** Mismo que deberá rendir el **SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MORELOS**, a efecto de que informe si en los archivos de esa unidad administrativa cuenta con el expediente personal, incluyendo sus nóminas de [REDACTED] [REDACTED] quien fungía como **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (CONTRALOR MUNICIPAL) DE YECAPIXTLA, MORELOS** [REDACTED], y de ser así exhiba en un **PLAZO DE TRES DÍAS** a esta Sala, copia debidamente certificada.

<sup>17</sup> ARTICULO 436.- Prueba documental y documentos redactados en idioma extranjero. La prueba de documentos deberá ofrecerse presentando éstos, si no obraren ya en los autos, o señalando el lugar o archivo en que se encuentren y proponiendo, en este último caso, los medios para que se alleguen a los autos. Si estuvieren redactados en idioma extranjero, se acompañará su traducción.

<sup>18</sup> ARTICULO 490.- Sistema de valoración de la sana crítica. Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ellos y en su conjunto, racionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia, debiendo, además, observar las reglas especiales que este Código ordena.

Informe que obra en el presente expediente, al que se le confiere valor en términos de lo dispuesto por los artículos 428<sup>19</sup>, 429<sup>20</sup>, 437 primer párrafo y 490 del **CPROCIVILEM** de aplicación supletoria a la **LJUSTICIAADVMAEMO**, y 133 de la **LGRA** y que será tomada en consideración en el apartado siguiente de la presente resolución.

Pruebas todas, que serán tomadas en consideración para arribar a los razonamientos y conclusiones que se emiten en los siguientes subcapítulos; sin embargo, también se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 135 de la **LGRA**, que señala:

**Artículo 135.** Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan.

De donde se advierte:

<sup>19</sup> ARTICULO 428.- Petición de informes a autoridades públicas. Los titulares de las dependencias y entidades de las administraciones públicas, federal, estatal y municipal no absolverán posiciones en la forma que establece el Capítulo anterior; pero la parte contraria podrá pedir que se les libre oficio, insertando las preguntas que vinculadas con los hechos del juicio quiera hacerles para que, por vía de prueba de informe, sean contestadas dentro del plazo que designe el Tribunal y que no excederá de diez días.

Asimismo podrá solicitarse a las autoridades que informen sobre algún hecho, constancia o documento que obre en sus archivos o de que hayan tenido noticia por razón de la función que desempeñen, que se relacionen con la materia en contención.

<sup>20</sup> ARTICULO 429.- Obligación de las autoridades requeridas de proporcionar informes. Las autoridades requeridas estarán obligadas a contestar al Juzgado, proporcionando la información y datos de que tengan conocimiento u obren en la documentación y archivos de la dependencia a su cargo, que tengan relación y que puedan surtir efecto dentro del juicio.



Que toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad.

Que las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputan las mismas.

Que quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa, no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan.

Aunado a lo anterior, en el tema relativo a la prueba a favor del imputado, se deben garantizar, entre otros, los derechos de presunción de inocencia y no autoincriminación.

#### 6.4 Ley aplicable.

En este contexto, para la resolución de las faltas administrativas de naturaleza grave, en los artículos 9, fracción IV, 12, 14, de la **LGRA**; 8, fracción VII, 11 y 13, de la **LRESADMVASEMO**, se atribuyó competencia al **Tribunal**.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Para determinar la Ley aplicable al caso en estudio, es necesario traer a la vista la fecha en la que ocurrieron los hechos imputados al **presunto responsable**. Así, de las constancias que integran el expediente en estudio, se advierte lo siguiente:

Que derivado del **IPRA**, la fecha en que se atribuye la comisión de la infracción al **presunto responsable**, por la falta administrativa grave de **Desacato** prevista en el artículo 63 de la **LGRA**, tuvo lugar, de acuerdo a lo que atribuye la **autoridad investigadora**, en enero de dos mil veinticuatro.

En este orden de ideas, al realizar la consulta en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado de **Normativa Nacional e Internacional**, en el Sistema de Consulta de Ordenamientos,<sup>21</sup> esta autoridad advierte que el Decreto por el que se expide la **LGRA** se publicó en el "Diario Oficial de la Federación" el día dieciocho de julio de dos mil dieciséis, entrando en vigor el Decreto al día siguiente; y la **LGRA** entró en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del Decreto, según el artículo Transitorio Tercero; es decir, la **LGRA** entró en vigor el diecinueve de julio de dos mil diecisiete.



En consecuencia, el presente asunto, se resuelve en términos de la **LGRA vigente al momento en que ocurrieron los hechos**, es decir, la referida en el párrafo anterior, **vigente a partir del día diecinueve de julio de dos mil diecisiete**.

Por lo anterior se observa que, en el Título Tercero, Capítulo II, de la **LGRA**, se establecieron las conductas de los

<sup>21</sup> <https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional>



**servidores públicos** que son sancionadas como faltas administrativas graves, y que en lo específico se señala la relativa a la imputación que se hace al **presunto responsable**:

| FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE   | DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 63 LGRA<br>Desacato | Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. |

"2026, Año de Margarita Maza Parada".  
TJA  
JOS  
ESPECIALIZADO  
ADMINISTRATIVO

6.5 Tipicidad

Se debe tomar en cuenta que el principio de **Tipicidad** aplicable al derecho penal, también es aplicable en el derecho administrativo sancionador, en tanto que éste último, de igual manera, es una manifestación de la potestad punitiva del Estado, y de acuerdo a la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, al momento de resolver, debe acudirse al principio antes mencionado, lo cual tiene apoyo en el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que a la letra versa:



**“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.”<sup>22</sup>**

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, **se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes.** En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. **Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas,** de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, **la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida,** sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.”

(Lo resaltado no es origen)

Por lo tanto, acorde con el anterior criterio jurisprudencial, la **tipicidad** conlleva la obligación de encuadrar la conducta realizada por el presunto infractor, exactamente en la hipótesis normativa previamente

<sup>22</sup> Época: Novena Época; Registro: 174326; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, Agosto de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: P./J. 100/2006; Página: 1667

Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel.

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de dos mil seis.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 398/2014 del Pleno, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 25 de noviembre de 2014.



establecida como infracción o falta administrativa ya sea grave o no grave.

### 6.6 Análisis de la Responsabilidad Administrativa imputada al C. [REDACTED]

En concepto de la **autoridad investigadora** en el caso que nos ocupa, se configura la falta administrativa denominada desacato, la cual es grave y se estipula en el artículo 63 de la **LGRA**, en razón de los hechos y razones apuntadas que han sido transcritas, tal y como ya se ha señalado, en el **IPRA** emitido en relación al presente procedimiento.

En tal razón, la **autoridad investigadora** allegó los datos, información y documentación que a su consideración acreditan los elementos que integran dicha falta, misma que como ya hemos señalado, establece:

**Artículo 63.** Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

Al respecto, tenemos los siguientes elementos:

- Debe tratarse de un servidor público;
- Que sea requerido por autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de

"2026, Año de Margarita Maiza Parada"

defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, y

- Que proporcione información falsa, no de respuesta, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información;
- **A pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.**

Dicho lo anterior, en el presente caso queda acreditado el primer elemento, relativo al carácter de servidor público que ostentaba el hoy probable responsable, ya que los hechos que se le imputan fueron en el periodo en el que se desempeñó como Contralor Municipal de Yecapixtla, Morelos, cuando le fue solicitada información oficial por parte del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro.

Lo anterior se corrobora con la copia certificada de su nombramiento como Contralor Municipal de Yecapixtla, Morelos, expedido por el Presidente Municipal de dicho municipio, el día primero de enero de dos mil veintidós y que obra en copia certificada en el expediente a foja 198 del expediente que se resuelve.

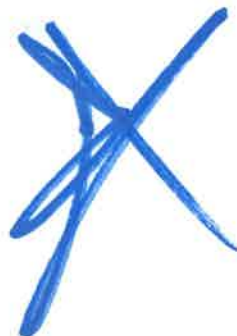
Ahora bien, si bien es cierto, que en el presente asunto quedó acreditado, qué:



Mediante oficio [REDACTED], de fecha veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, **solicitó diversa información** (número de denuncias recibidas por el órgano a su cargo; número de procedimientos iniciados; número de procedimientos que culminaron en sentencia firme; etc) al hoy **presunto responsable** en su carácter de Contralor Municipal de Yecapixtla, Morelos; y

Que no fue, sino hasta el día veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, que [REDACTED] en su carácter de Contralor Municipal de Yecapixtla, Morelos (quien sustituyó en el cargo al probable responsable), presentó su contestación a la información solicitada, mediante oficio MY/CM/SEP/2024/112 de fecha doce de septiembre de dos mil veinticuatro, el cual se encuentra visible en copia certificada a foja 44 del expediente. Documentales ambas, que fueron previamente valoradas.

Además, que no pasa desapercibido que a foja 50 del expediente obra copia certificada de un oficio número [REDACTED], de fecha dos de abril de dos mil veinticuatro, dirigido al [REDACTED], Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, por medio del cual, el **presunto responsable** supuestamente da contestación al oficio [REDACTED], sin embargo, no se advierte que



"2026, Año de Margarita Mazón Parada".  
LA ADMINISTRACIÓN  
DE MORELOS  
ESPECIALIZACIÓN  
EN ADMINISTRACIÓN

este escrito haya sido entregado por no contener sello de recibido.

No obstante todo lo anterior, lo cierto es que **no quedó acreditado el elemento** consistente en que **retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información** (número de denuncias recibidas por el órgano a su cargo; número de procedimientos iniciados; número de procedimientos que culminaron en sentencia firme; etc), **a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.**

En este sentido, correspondía a la **autoridad investigadora acreditar todos los elementos del tipo correspondiente al desacato**, contemplado en el artículo 63 de la **LGRA**; sin embargo, ningún elemento probatorio aportó, para acreditar que al **presunto responsable le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables**, y que a pesar de ello, retrasó deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, razón por la que no queda acreditado este elemento del tipo administrativo a que se refiere el artículo 63 de la **LGRA**.

Para ello, es conveniente revisar, tanto las pruebas descritas y valoradas en el capítulo 6.3 de la presente resolución, como en general todas las constancias del presente expediente, y en ninguna parte obra alguna que acredite este elemento.



Ahora, tampoco pasa desapercibido, que a foja 38 del expediente consta el oficio [REDACTED] por medio del cual, la **autoridad investigadora**, requiere al Titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, copias certificadas del oficio [REDACTED] de fecha veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, dirigido en su momento al presunto responsable en su calidad de Contralor Municipal de Yecapixtla, Morelos; y también se requiere la exhibición de la respuesta que se haya dado al referido oficio, [REDACTED] apercibiendo que de no cumplir con lo solicitado, se impondría una multa de [REDACTED]

No obstante lo anterior, no se debe confundir, que esta medida de apremio fue, respecto del requerimiento referido en el párrafo anterior; es decir, en relación a exhibir copias certificadas de los documentos ya aludidos en líneas anteriores; más no es un apercibimiento de una medida de apremio decretada en torno al requerimiento de información (número de denuncias recibidas por el órgano a su cargo; número de procedimientos iniciados; número de procedimientos que culminaron en sentencia firme; etc) solicitada mediante el oficio [REDACTED] de fecha veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, dirigido en su momento al presunto responsable en su calidad de Contralor Municipal de Yecapixtla, Morelos.

Por lo anterior, y al no haberse acreditado uno de los elementos constitutivos del tipo administrativo de **desacato**, en este caso el **elemento consistente en que, retrase**

deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables, no se encuentra acreditada la falta, siendo necesario que se colmen en la totalidad de los elementos que la integran.

En este sentido, al derecho administrativo sancionador le son aplicables los principios del derecho penal, específicamente en cuanto al principio de tipicidad, consistente en la adecuación de la conducta infractora con la figura o tipo descrito por la ley.

Bajo esta premisa, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, se puede acudir a los principios penales sustantivos como es el principio de tipicidad, siempre y cuando se tomen de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.

El principio de tipicidad se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes y se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción, suponiendo en todo caso la presencia de una ley cierta que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones, por lo que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma.



Así, de acuerdo al principio de tipicidad, si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida.

Asimismo, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, y dicho principio debe interpretarse de modo sistemático a efecto de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el artículo primero constitucional.

Bajo este análisis, el principio de presunción de inocencia se traduce en que la autoridad resolutora debe absolver al servidor público presunto responsable, cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de la responsabilidad que se le atribuye; en este caso, para acreditar que el ciudadano [REDACTED] haya incurrido en la falta grave de **desacato**, cuando esto no se encuentra debidamente acreditado por la **autoridad investigadora**.

En ese orden de ideas, **resulta necesario que se actualicen la totalidad de elementos señalados para el tipo administrativo de peculado, lo cual no ocurre**, por lo que no se acredita.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis:

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.** <sup>23</sup>

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público"; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos". En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.

Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores.

Por lo que, en conclusión y de la valoración que en su conjunto se hace de las pruebas aportadas en juicio conforme

<sup>23</sup> Tipo: Aislada. Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P. XXXV/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, página 14. Registro digital: 186185



a la fracción II del artículo 86 de la **LJUSTICIAADMVAEM**, del artículo 131 de la **LGRA**, y del artículo 490 del **CPROCIVILEM** aplicado de manera supletoria a la primera ley citada, se estima que **no se tienen por acreditados todos los elementos del tipo administrativo de desacato conforme lo establece el artículo 63 de la LGRA.**

#### 6.7 Decisión respecto de la conducta atribuida al C.

Toda vez que no se acreditaron todos los elementos configurativos de la infracción administrativa denominada **DESACATO**, prevista en el artículo 63 de la **LGRA**, no procede la imposición de sanción al ciudadano [REDACTED], respecto de la comisión de dicha falta administrativa en relación con los hechos imputados por la **autoridad investigadora.**

Por todo lo expuesto y fundado con anterioridad, es de resolverse conforme a los siguientes:

#### 7. PUNTOS RESOLUTIVOS

**PRIMERO.** Esta Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, en términos de lo señalado en el capítulo 4 de la presente resolución.

**SEGUNDO.** No se acreditó la responsabilidad administrativa del [REDACTED] en la comisión de la falta grave de **DESACATO**, al no existir los elementos para determinarla; por tanto, **no es responsable administrativamente por la comisión de dicha conducta**, tal y como se expone en la presente resolución.

**TERCERO.** En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

## 8. NOTIFICACIONES

**NOTIFÍQUESE** a las partes, como legalmente corresponda.

## 9. FIRMAS

Así, lo resolvió y firma el **MAGISTRADO JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO**, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas de este **Tribunal**, ante su Secretaria de Acuerdos de Procedimientos en Materia de Responsabilidades Administrativas, **KATYA MELÉNDEZ TAPIA**<sup>24</sup>, con quien legalmente actúa y da fe.



**MAGISTRADO**

**JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO**  
TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA  
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

<sup>24</sup> En términos de la sesión ordinaria cuarenta y uno de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veinticinco y de acuerdo a la reforma del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.



SECRETARIA DE ACUERDOS DE PROCEDIMIENTOS EN  
MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
ADSCRITA A LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN  
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

  
KATYA MELÉNDEZ TAPIA

KATYA MELÉNDEZ TAPIA, Secretaria de Acuerdos de Procedimientos en Materia de Responsabilidades Administrativas adscrita a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, **CERTIFICA:** que estas firmas corresponden a la resolución emitida por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente número **TJA/5ªSERA/007/2025-PRA/FG**, promovido por **LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS**, en contra del ciudadano [REDACTED], a quien se le imputó la comisión de **falta grave** durante su desempeño en el servicio público; misma que se dictó el doce de mayo del año dos mil veintiséis. **CONSTE.**

VRPC

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

SECRETARIA DE ACUERDOS DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

THESE TAVES UN ACHERON DE PROCEDEMENT  
MATHS ET ALPHABETIQUES ACHERON  
ACHERON LA TAVES UN ACHERON  
ACHERON LA TAVES UN ACHERON

ACHERON LA TAVES UN ACHERON



ACHERON